



COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Asunto: **Resolución 18/2024**

Número de Folio: **310573824000152**

Mérida, Yucatán, a 30 de agosto de 2024

Mérida, Yucatán, a los treinta días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro, el Comité de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, procede a dictar Resolución de acuerdo a lo siguiente:

ANTECEDENTES

I. Solicitud de información. Con fecha 02 de agosto de 2024 la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia, recibió de manera personal una solicitud de información la cual se registró dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia, asignándose el folio **310573824000152**, en los siguientes términos:

*"...
Vengo por medio del presente oficio, a solicitar en atención al derecho humano de acceso a la información pública, se me expida copia simple, del contenido íntegro de la siguiente documentación:*

*...
Oficio DUA-162/2024 de fecha treinta y uno de mayo del año en curso, suscrito por el Maestro en Derecho Carlos M. Cetina Patrón, coordinador Jurídico de la unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes, y la Licenciada en Administración María Cristina Sánchez Tello Zapata, Directora de la Unidad de Administración del Tribunal Superior.*

II. Requerimiento de información. - Por oficio DTAIPE-TSJ-368/2024, el Titular del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Estadística del Tribunal Superior de Justicia del Estado, requirió a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes, y a la Unidad de Administración del Tribunal Superior, ambos de este Tribunal, para que, atendiera dicha solicitud.

III. Informes de la instancia requerida. Mediante oficio número DUA-261/2024 de fecha 29 de agosto de 2024 dirigido al jefe del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Estadística del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Coordinador jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la directora de la Unidad de Administración, de este Tribunal, señalaron que la información referente al oficio DUA-162/2024, clasificaron la información de reservada, argumentando lo siguiente:

"En atención a su oficio DTAIPE-TSJ-368/2024 relativa a la solicitud de información identificada con el número de folio 310573824000152, en el que se requiere:

"Oficio DUA-162/2024 de fecha treinta y uno de mayo del año en curso, suscrito por el Maestro en Derecho Carlos M. Cetina Patrón, coordinador Jurídico de la unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes, y la Licenciada en Administración María Cristina Sánchez Tello Zapata, Directora de la Unidad de Administración del Tribunal Superior."

Se hace de su conocimiento que el oficio DUA-162/2024 fue elaborado en conjunto por las áreas firmantes y presentado para su estudio en la Décimo Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, celebrada el día seis de junio de dos mil veinticuatro, el cual contiene un análisis jurídico-administrativo elaborado con fundamento en las fracciones I y XII del artículo 56, fracciones VI y VII del artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán; y en apego a lo dispuesto en el

decimoquinto párrafo del artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán y la fracción I del artículo 6 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán.

Conforme al artículo 90 fracción VI y VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes tiene como atribución promover y realizar investigaciones, estudios jurídicos y proyectos normativos relacionados al mejoramiento de la impartición de justicia, así como asesorar jurídicamente a los Plenos del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura y a la Presidencia del Tribunal; siendo el Pleno del Tribunal Superior de Justicia quien, conforme al artículo 30 de la citada Ley Orgánica, deberá en su caso determinar las acciones jurídicas y administrativas que estime conducentes en relación a dichos análisis.

Ahora bien, tal y como se desprende de la décimo primera sesión ordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, celebrada el día 06 de junio de 2024, en la misma, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia tuvo conocimiento del análisis jurídico-administrativo realizado aprobando su contenido, más no ordenó acción alguna, de naturaleza jurídica o administrativa, para la ejecución de las opiniones o recomendaciones plasmadas en el mismo.

Ello se desprende del acuerdo tomado en la sesión que dice lo siguiente: "se aprueba el contenido del análisis jurídico administrativo elaborado en conjunto por las áreas antes señaladas; en consecuencia, comuníquese a las mismas."

Es decir, el oficio DUA-162/2024, que contiene un análisis jurídico-administrativo, se trata de una opinión, recomendación, propuesta o punto de vista emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la Dirección de Administración del Tribunal Superior de Justicia, cuyo contenido tuvo conocimiento el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán en la sesión del día 06 de junio de 2024, sin que hasta el momento dicho órgano colegiado haya tomado una decisión definitiva sobre los puntos planteados en el mismo ni ordenado acción alguna que se traduzca en la ejecución de las propuestas planteadas.

En esas condiciones, resulta evidente que el contenido del oficio DUA-162/2024 requerido por la parte solicitante, encuadra en el supuesto previsto en la fracción VIII del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y por lo tanto ES SUSCEPTIBLE DE SER CLASIFICADO COMO RESERVADO, se explica:

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone que la información que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada, es susceptible de reserva. Al reservarse esta información lo que se protege es la secrecía en la toma de decisiones hasta que éstas no sean adoptadas, a fin de que dicha deliberación no sea afectada por agentes externos, como podrían ser los medios de comunicación. En ese sentido, la razón legal de dicha causal de reserva es evitar que se divulgue información que pueda entorpecer o afectar el correcto desarrollo de la deliberación.

Asimismo, los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de La Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas", emitidos por Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, señalan que se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última determinación, sea o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando por cualquier causa no sea posible continuar con su desarrollo.

Dicho esto, en el caso que nos ocupa, el oficio requerido, encuadra en el supuesto previsto en la fracción VIII del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que como se ha dicho se trata de una opinión, análisis o propuesta, jurídico-administrativa emanada por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la Dirección de Administración del Tribunal Superior de Justicia, respecto de la cual, el órgano encargado de deliberar sobre su implementación o ejecución, no ha tomado decisión alguna, por lo que de darse a conocer su contenido a agentes externos, previa la toma de decisión que en su caso recaiga a dicha propuesta, podría afectarse la imparcialidad e independencia de quienes forman parte del ente colegiado deliberante, es decir, los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.

Conforme a los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de La Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas", en caso de considerar como información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente: I. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio; II. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que participan en el proceso deliberativo; III. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación.

Los requisitos señalados se actualizan del siguiente modo:

I. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio:

Durante el desarrollo de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, celebrada el día 06 de junio de 2024, la secretaria general de acuerdos, informó que durante el desarrollo de esta Sesión, le fue presentado el oficio DUA-162/2024 de fecha 31 de mayo del año en curso, suscrito por el maestro en Derecho Carlos M. Cetina Patrón, coordinador jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la licenciada en administración María Cristina Sánchez Tello Zapata, directora de la Unidad de Administración, ambos de este Tribunal.

Transcurrido el tiempo para su análisis, por mayoría de votos, el Pleno aprobó el contenido del análisis jurídico-administrativo elaborado en conjunto por las áreas antes señaladas y, en consecuencia, ordenó comunicárselo a las mismas.

En ese sentido, tenemos que existe un proceso deliberativo en curso, consistente en la determinación que en su caso emita el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado respecto a la implementación o ejecución de las propuestas contenidas en el oficio DUA-162/2024, mismo proceso que inició el día 06 de junio de 2024, fecha en la que se presentó para su análisis el contenido de las opiniones, recomendaciones y propuestas plasmadas en el estudio elaborado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la Dirección de la Unidad de Administración.

Se trata de un proceso deliberativo ya que conforme al artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, tiene como atribución, entre otras, tanto aprobar el anteproyecto anual de Presupuesto de Egresos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como ejercer el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, y resolver sobre transferencias de las partidas de dicho presupuesto.

En ese sentido, la propuesta u opinión emitida por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la Dirección de la Unidad de Administración, misma que tiene un impacto de naturaleza presupuestal, forma parte de un proceso deliberativo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, quien podrá o no tomar una decisión respecto a lo plasmado en dicho estudio, en ejercicio de sus atribuciones descritas en el artículo 30 citado.

No hay que perder de vista que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en la toma de decisiones, si bien podrá tomar en consideración la opinión jurídico-administrativa emanada por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la Dirección de Administración del Tribunal Superior de Justicia sobre el tema al que hace referencia el oficio DUA-162/2024, podrá también requerir información a otras áreas del Tribunal Superior de Justicia, a autoridades ajenas al Poder Judicial o agentes externos como universidades, colegios, entre otros, incluso, conforme a la fracción XXIII del artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia podrá acordar la contratación de servicios externos de asesoría, para el perfeccionamiento de la actividad jurisdiccional y de la que corresponde a las diferentes áreas del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

En dichas condiciones, resulta evidente que el acto en el cual el Pleno tuvo conocimiento de la propuesta, análisis u opinión jurídico-administrativa emanada por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la Dirección de Administración del Tribunal Superior de Justicia, sin que hasta el momento haya tomado determinación alguna en relación a la ejecución, o no, de lo propuesto en dicho documento, no puede considerarse una determinación concluyente por parte del órgano facultado para ello.

II. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que participan en el proceso deliberativo;

La información contenida en el oficio DUA-162/2024 de fecha 31 de mayo del año en curso, se trata de una opinión, recomendación o punto de vista de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la Dirección de la Unidad de Administración, áreas que dependen organizacionalmente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, ya que sus titulares son designados directamente por el Pleno del Tribunal conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, es decir, son unidades internas del Poder Judicial del Estado de Yucatán, y que por lo tanto, la información u opiniones que emanan de dichas áreas forman parte del proceso deliberativo iniciado tras la presentación del oficio al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán para su análisis.

III. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y

La información contenida en el oficio DUA-162/2024, se encuentra relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo existente que se sigue ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, ya que justamente, fue la presentación del mismo ante el Pleno en la sesión ordinaria del 06 de junio de 2024, lo que dio inicio a la discusión y deliberación de las acciones que en su caso se tomen para su implementación o ejecución.

IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación.

De difundirse la información contenida en el oficio DUA-162/2024, se podría interrumpir, menoscabar o inhibir cualquier determinación que en su caso emita el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán para la implementación de las propuestas contenidas en el estudio jurídico-administrativo emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la Dirección de Administración del Tribunal Superior de Justicia, ya que la deliberación podría verse influida presiones de agentes externos que tengan conocimiento previo de las opiniones ahí expuestas.

No hay que perder de vista que conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán los magistrados y los jueces deberán emitir sus resoluciones al margen de presiones de los otros

poderes, de las partes o grupos sociales, individuos o de los propios miembros del Poder Judicial (principio de independencia). En ese sentido, dar a conocer información que pueda interrumpir, menoscabar o inhibir cualquier determinación que en su caso emita el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, debe entenderse que afecta o pone en riesgo la libre toma de decisiones de dicho ente colegiado.

Ahora bien, en cuanto a la PRUEBA DE DAÑO, que conforme al artículo 104 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberá justificarse al clasificar determinada información de reservada, es decir, la argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados tendiente a acreditar que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla; se sostiene por los siguientes motivos:

1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional.

La información correspondiente al oficio DUA-162/2024, al forma parte de un documento que contiene una opinión, recomendación o punto de vista emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la Dirección de Administración del Tribunal Superior de Justicia, de ponerse a disposición de agentes externos, podría vulnerar el proceso deliberativo del Pleno que tuvo conocimiento del mismo y las resoluciones ejecutivas que en su caso emita.

Dar a conocer las opiniones jurídico-administrativas contenidas en el oficio DUA-162/2024 de manera previa a la toma de decisiones por quien legalmente tiene atribuciones para ejecutar su contenido, violaría el proceso deliberativo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, ya que factores externos podrían influir en la imparcialidad u objetividad de quienes forman parte de la toma de decisiones, afectándose la libertad decisoria de este ente colegiado.

Además, de proporcionar la información contenida en el oficio DUA-162/2024, se causaría un daño en el desarrollo normal de las atribuciones o actividades de la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, afectándose la libertad en el ejercicio de sus facultades consistentes en promover y realizar investigaciones, estudios jurídicos y proyectos normativos relacionados al mejoramiento de la impartición de justicia, así como asesorar jurídicamente.

No hay que perder de vista que conforme al artículo 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, las disposiciones contenidas en dicha Ley, incluyendo, las normas que facultan al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, para tomar decisiones relativas a su propio funcionamiento y organización, son normas de orden e interés público. En ese sentido, todo acto que impida, menoscabe, interrumpa o inhiba la toma de decisiones de dicho ente colegiado, como lo sería la divulgación a agentes externos de la información que aquí se pretende, debe considerarse como perjudicial para el interés público.

2.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda dicha información

Divulgar la información contenida en oficio DUA-162/2024 que se encuentra en análisis y evaluación no aporta beneficio social alguno y sí un daño al interés público que se traduce en la necesidad de salvaguardar el proceso deliberativo existente en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en particular, la toma de decisiones, libre y con independencia de todo lo referente a su organización interna y funcionamiento.

Además, la información solicitada, consiste en una mera opinión, punto de vista o propuesta de unidades internas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, por lo que el supuesto interés de conocer su contenido, previa la toma de cualquier decisión del Pleno sobre las propuestas ahí planteadas, no puede superar la necesidad de proteger el perjuicio que supondría la divulgación de dicha información en el proceso deliberativo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, mismo que debe desarrollarse de forma libre e independiente de injerencias externas.

3.- La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo

La clasificación de la información solicitada como reservada es el mecanismo idóneo para evitar el perjuicio que pudiese existir por dar a conocer las opiniones, recomendaciones o puntos de vista de las Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la Dirección de Administración del Tribunal Superior de Justicia previa a la toma de decisiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia en relación a las mismas. Lo anterior, ya que el período de reserva surtirá efectos únicamente hasta en tanto el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán tome alguna decisión en relación a las propuestas planteadas en el estudio-jurídico administrativo que fue puesto a su conocimiento en la sesión del 6 de junio de 2024.

De este modo se garantiza el derecho del solicitante de conocer la información que ha sido requerida, toda vez que la misma será entregada una vez el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán tome alguna decisión relacionada con el contenido del estudio referido, y a la vez, se salvaguarda la facultad del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de tomar las decisiones relativas a su propia organización y funcionamiento de forma libre e independiente de cualquier injerencia externa.

En virtud de todo lo anterior, y al haberse justificado todos los extremos previstos en la Ley, se reserva el documento requerido, de conformidad en los artículos 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y 113 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, determinando su clasificación por un periodo de seis meses.

En razón de la clasificación declarada respecto al documento señalado con anterioridad, resulta

conducente convocar al Comité de Transparencia de este Tribunal, quien con fundamento en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, así como el numeral 44, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es la autoridad encargada de confirmar, modificar, o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas, a fin que proceda a acordar lo conducente respecto de la información señalada, de conformidad al numeral 137 de la citada Ley General."

IV. Remisión del expediente a la Presidencia del Comité de Transparencia. A través del diverso oficio DTAIPE-TSJ-393/2024, el jefe del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Estadística del Tribunal Superior de Justicia, remitió el expediente a la Presidencia del Comité de Transparencia de este mismo Tribunal, a efecto de que, conforme a sus atribuciones, le diera el turno correspondiente a fin de que se elaborara el proyecto de resolución por parte del integrante del Comité de Transparencia que correspondiera.

V. Convocatoria. Mediante convocatoria de fecha 29 de agosto de 2024, la presidenta del Comité de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia, notificó a los integrantes de este Comité, que el día 30 de agosto de 2024, se llevaría a cabo la vigésima séptima sesión extraordinaria, a fin de analizar, discutir y aprobar, en su caso, el proyecto de resolución en la clasificación de la información reservada antes señalada y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. - Competencia. Que el Comité de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, tiene entre sus funciones confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, **clasificación de la información** y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados, según lo dispuesto en el artículo 44, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con el primer párrafo del artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, así como de conformidad con lo señalado en los artículos 3 y 4 fracción II del Acuerdo General OR14-160804-23 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán por el que se regula su Comité de Transparencia.

SEGUNDO. - Materia de estudio. En el caso, se tiene que la materia del presente asunto se centra en la clasificación solicitada al Coordinador Jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la Directora de la Unidad de Administración como reservada por un periodo de seis meses, ello a través del oficio número DUA-162/2024 materia de la solicitud de información con número de folio **310573824000152**.

Por lo que acorde a lo establecido por el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información, este Comité debe realizar el examen de la clasificación de información como reservada, realizada por el área requerida, para determinar si aquella se ajustó a las disposiciones legales y normativas aplicables.

TERCERO. - Análisis de fondo. Una vez precisada la materia de análisis, se procede a su estudio en los términos siguientes:

Como se advierte de los antecedentes, el Coordinador jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la Directora de la Unidad de Administración, al contestar la solicitud de colaboración realizada por el jefe del

Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Estadística del Tribunal Superior de Justicia, en su oficio DTAIPE-TSJ-368/2024, de fecha 05 de agosto de 2024, en la parte conducente de la solicitud de acceso a la información con número de folio **310573824000152**, relativa al contenido del oficio número DUA-162/2024, clasificaron como información reservada la información ahí contenida por un periodo de seis meses, con fundamento en el supuesto previsto en la fracción VIII del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Para determinar si la clasificación de la información como reservada realizada por el Coordinador Jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la Directora de la Unidad de Administración, fue correcta o no, es necesario, en primer lugar, describir el marco jurídico que regula el derecho de acceso a la información en nuestro estado.

Así, tenemos que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán es el ordenamiento legal que tiene como objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad del Estado de Yucatán y los municipios que lo conforman.¹

Dicha ley establece en su artículo 63, que la información en posesión de los sujetos obligados es pública y únicamente estará sujeta al régimen de excepciones previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y en esa propia ley.² A su vez, el artículo 78 del ordenamiento legal estatal ya citado, dispone que la clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder se encuentra en alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad. Para tal efecto, los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de realizar la clasificación de la información, con base en las disposiciones y el procedimiento previsto en el Título Sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los lineamientos generales que emita el sistema nacional.³

De lo anteriormente enunciado se colige que, en principio, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública; sin embargo, dicha regla general admite excepciones, las cuales se refieren a los casos de clasificación de información como "reservada" o "confidencial", realizada por las áreas que detentan la información solicitada.

Por otro lado, en relación al momento en el que se puede realizar la clasificación de la información por parte del área que la detenta, cabe destacar que el artículo 106 de la Ley

¹ "Artículo 1. Objeto

Esta ley es de orden público y de observancia en todo el estado de Yucatán, es reglamentaria del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 75 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de transparencia y acceso a la información.

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad del Estado de Yucatán y los municipios que lo conforman."

² "Artículo 63. Información

La información en posesión de los sujetos obligados es pública y únicamente estará sujeta al régimen de excepciones previsto en la Ley general y en esta ley."

³ "Artículo 78. Clasificación

La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder se encuentra en alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad. Para tal efecto, los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de realizar la clasificación de la información, con base en las disposiciones y el procedimiento previsto en el título sexto de la Ley general y los lineamientos generales que emita el sistema nacional."

General de Transparencia y Acceso a la Información establece tres oportunidades para realizar dicha clasificación; mismo que se transcribe a continuación:

"Artículo 106. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:

- I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;
- II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o
- III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley."

Como se advierte del artículo transcrito, la fracción I contempla que al momento de recibirse una solicitud de acceso a la información puede realizarse la clasificación, tal como aconteció en el caso concreto, pues la clasificación realizada por la coordinadora jurídica de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la directora de la Unidad de Administración ambos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se llevó a cabo con motivo de la solicitud de información recibida el día 02 de agosto del presente año, por lo que el momento en que se realizó la clasificación se encontró ajustado a derecho.

Ahora bien, a fin de fundar y motivar la clasificación de información como reservada, los citados servidores públicos argumentaron que, el oficio requerido, encuadra en el supuesto previsto en la fracción VIII del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que de acuerdo a su contenido se trata de una opinión, análisis o propuesta, jurídico-administrativa, respecto de la cual, el órgano encargado de deliberar sobre su implementación o ejecución, es decir, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, no ha tomado decisión alguna, por lo que de darse a conocer su contenido a agentes externos previa la toma de decisión que en su caso recaiga a dicha propuesta, podría afectarse la imparcialidad e independencia de quienes forman parte del ente colegiado encargado de deliberar y emitir una decisión conclusiva sobre el mismo.

En razón de la argumentación de los titulares requeridos, debe sostenerse que, en efecto, de conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General de la materia es posible clasificar como información reservada aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada.

Sin embargo, en atención a que la clasificación de la información constituye una restricción o limitación al derecho de acceso a la información, el artículo 114 de la citada Ley establece el deber de fundar y motivar las causales de reserva previstas en el referido artículo 113, a través de la aplicación de la prueba de daño.⁴

Aunado a lo anterior, el artículo vigésimo tercero, del *"Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas"* publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016 y su reforma publicada el 18 de noviembre de 2022, dispone:

⁴ "Artículo 114. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título."

“Vigésimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente:

- I. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio;
 - II. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que participan en el proceso deliberativo;
 - III. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y
 - IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación.
- Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última determinación, sea o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando por cualquier causa no sea posible continuar con su desarrollo.

...

En este caso se actualiza, por regla general, cuando la información se encuentre relacionada directamente con el proceso deliberativo y que con su difusión se puedan interrumpir, menoscabar o inhibir, la determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación.

En tal circunstancia, las opiniones, recomendaciones o puntos de vista emitidos por las personas servidoras públicas que participan en un proceso deliberativo, o bien, los insumos en los que se apoyan tienen carácter reservado, a efecto de hacer prevalecer la eficacia en la culminación de la toma de decisiones.

Sobre ese aspecto debe añadirse, además, que el proceso deliberativo deberá entenderse concluido cuando, entre otras causas, se adopte la última determinación, es decir, con decisión final que traiga como consecuencia su ejecución.

Con base en las pautas antes establecidas, este Comité determinará si el examen de la clasificación realizada por la titular del área requerida estuvo fundada y motivada, siendo necesario partir de la descripción de la función del ente denominado Tribunal Superior de Justicia de acuerdo con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Yucatán:

“Artículo 64.- - El Poder Judicial del Estado se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, en el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, en los Juzgados de Primera instancia, en los Tribunales Laborales, y en los demás establecidos o que en adelante establezca la ley. En el ejercicio de la función judicial, impartirá justicia con equidad, con perspectiva de género y con apego en los principios de igualdad, autonomía, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad y seguridad jurídica. El Poder Judicial deberá fomentar una capacitación continua en las juzgadoras y los juzgadores respecto a todo lo expresado en este artículo.

...

El Tribunal Superior de Justicia es la máxima autoridad del Poder Judicial y estará integrado por quince Magistradas y Magistrados, quienes tendrán su respectivo suplente para casos de ausencias mayores a tres meses; funcionará en Pleno y en Salas, de conformidad con lo dispuesto por esta constitución y las leyes. En su conformación se observará el principio de paridad de género.

...

Del artículo anteriormente transcrito se desprende que:

- El Poder Judicial del Estado se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, en el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, en los Juzgados de Primera instancia, en los Tribunales Laborales, y en los demás establecidos o que en adelante establezca la ley.
- El Tribunal Superior de Justicia es la máxima autoridad del Poder Judicial, está integrado por quince Magistradas y Magistrados y funciona en Pleno y en Salas, de conformidad con lo dispuesto por la constitución y las leyes.

En cuanto a la competencia del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán señala que:

"Artículo 30.- Son atribuciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia:

- I.- Hacer uso del derecho de iniciar leyes que le confiere la Constitución Política del Estado de Yucatán;
- II.- Erigirse en Tribunal Constitucional y conocer de los asuntos relativos al control constitucional local;
- III.- Elegir al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y conocer y aceptar, en su caso, su renuncia a dicho cargo;
- IV.- Determinar las adscripciones de los magistrados a las Salas y realizar los cambios necesarios entre sus integrantes con motivo de la elección del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado;
- V.- Establecer Salas Regionales mediante acuerdos generales;
- VI.- Resolver sobre las licencias que presenten los magistrados, menores a tres meses;
- VII.- Revisar las decisiones del Consejo de la Judicatura respecto a la designación, adscripción, ratificación y remoción de jueces, para verificar si fueron acordadas conforme a la legislación y normativa aplicable, previa solicitud del juez correspondiente, y remitir el resultado debidamente fundado y motivado al Consejo de la Judicatura, para las modificaciones necesarias, según fuere el caso;
- VIII.- Revisar las decisiones del Consejo de la Judicatura relativas a la creación de Departamentos Judiciales y juzgados, modificar su competencia y jurisdicción territorial, en términos de ley, a solicitud de un magistrado, consejero o juez y remitir el resultado debidamente fundado y motivado al Consejo de la Judicatura, para las modificaciones necesarias, según fuere el caso;
- IX.- Resolver las contradicciones entre los precedentes que emitan sus salas, en los términos que establezcan los acuerdos generales que al efecto se emitan;
- X.- Resolver sobre nombramientos del personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como de las quejas administrativas relacionadas con éstos, o sobre las licencias que presenten;
- XI.- Recibir el informe de actividades de su competencia, formulado por el Presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura para su análisis y, en su caso, aprobarlo;
- XII.- Resolver sobre cambios de adscripción del personal del Tribunal Superior de Justicia;
- XIII.- Expedir el Reglamento Interior, Acuerdos Generales y demás normas administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y atribuciones;
- XIV.- Remitir a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, los informes sobre administración de justicia que le soliciten, en términos de ley;
- XV.- Aprobar el anteproyecto anual de Presupuesto de Egresos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y remitirlo al Consejo de la Judicatura para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial, con la anticipación que permita su remisión oportuna acorde a la Constitución Política del Estado de Yucatán;
- XVI.- Fijar las bases para la evaluación de desempeño sobre la actuación profesional y ética de los magistrados, y realizar dicha evaluación acorde a ellas, para efectos del último párrafo del artículo 66 de la Constitución Política del Estado;

- XVII.-** Determinar la creación de áreas necesarias para mejorar la impartición de justicia, acorde con lo establecido en esta Ley y lo permita el presupuesto del Tribunal;
- XVIII.-** Ejercer el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, así como resolver sobre transferencias de las partidas de dicho presupuesto, en términos de ley;
- XIX.-** Autorizar, de manera conjunta con el Pleno del Consejo, en la última sesión de cada año, el calendario de labores del Poder Judicial de la siguiente anualidad, en los términos previstos por las disposiciones expedidas por el Pleno del Consejo;
- XX.-** Constituir un comité de adquisiciones del Tribunal Superior de Justicia;
- XXI.-** Determinar, de manera conjunta con el Pleno del Consejo, la suspensión de labores en todas o en algunas direcciones u órganos técnicos y jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado en días hábiles;
- XXII.-** Instrumentar estímulos a la productividad del personal adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado, atenta la disponibilidad presupuestal;
- XXIII.-** Acordar la contratación de servicios externos de asesoría, para el perfeccionamiento de la actividad jurisdiccional y de la que corresponde a las diferentes áreas del Tribunal Superior de Justicia del Estado;
- XXIV.-** Presentar la cuenta pública, con la documentación respectiva y en los términos establecidos en la Ley de la materia;
- XXV.-** Designar a su representante ante la Comisión de Conflictos Laborales del Poder Judicial del Estado;
- XXVI.-** Conocer y resolver el recurso de revocación contra las resoluciones que emita la Comisión de Conflictos Laborales del Poder Judicial del Estado, en los conflictos de trabajo suscitados entre el Tribunal Superior de Justicia del Estado y sus servidoras y servidores públicos, en términos del párrafo vigésimo del artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, con excepción de los conflictos relativos a las demás servidoras y servidores públicos del Poder Judicial del Estado, en los términos de los artículos 166 a 175 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, en aquello que fuere conducente. La resolución de este recurso será definitiva e inatacable, y
- XXVII.-** Las demás que establezca la Constitución Política del Estado, esta Ley y demás ordenamientos."

Es decir, corresponde a las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, expedir Acuerdos Generales y demás normas administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y atribuciones.

De la misma manera la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, señala:

"Artículo 56.- Son atribuciones de la Unidad de Administración, las siguientes:

- I.- Ejecutar las funciones administrativas de su competencia, procurar el correcto ejercicio del presupuesto de egresos que corresponda al Tribunal, así como ejecutar los servicios generales del Tribunal;
- II.- Llevar la contabilidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado;
- III.- Proponer al Pleno la adquisición de bienes y cuidar que se provea a éste, a las Salas y demás oficinas del Tribunal, de los elementos materiales y de informática necesarios para el mejor desempeño de las funciones;
- IV.- Formular y mantener actualizado el inventario de recursos materiales del Tribunal;
- V.- Conservar bajo su custodia los muebles y enseres que existan en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, ejerciendo vigilancia sobre ellos;
- VI.- Realizar las visitas que se le encomienden;
- VII.- Ejecutar el servicio de mantenimiento del Tribunal y vigilar los edificios que ocupe éste, dictando las medidas adecuadas para su conservación e higiene;
- VIII.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de las áreas del Tribunal;
- IX.- Auxiliar al Presidente en la elaboración del anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal Superior de Justicia;
- X.- Coordinar y vigilar los servicios de suministro;
- XI.- Realizar todo aquello que le encomiende el Presidente, dentro de los límites de sus facultades;

XII.- Proveer los insumos y servicios que resulten necesarios para brindar seguridad a las personas funcionarias, servidoras públicas, usuarias y visitantes dentro de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, y

XIII.- Los (sic) demás que le confieran el Pleno y las leyes.”

Artículo 59.- Son atribuciones de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes, las siguientes:

I.- Compilar, sistematizar y difundir los criterios emitidos por el Pleno y las Salas del Tribunal Superior de Justicia;

II.- Compilar y difundir los criterios contenidos en las tesis que emitan los tribunales federales, que sean útiles para la impartición de justicia del orden local;

III.- Compilar y actualizar los ordenamientos jurídicos que tengan relación con la administración de justicia, para mantener informados de sus cambios a las personas servidoras públicas del Poder Judicial que realizan funciones jurisdiccionales;

IV.- Auxiliar en la tramitación de las promociones relativas a los procesos de control constitucional local;

V.- Elaborar los anteproyectos de ley, acuerdos, circulares y demás disposiciones de observancia obligatoria que se deban someter a la resolución del Pleno del Tribunal Superior de Justicia o del Consejo de la Judicatura, en coordinación con la dirección o unidad correspondiente;

VI.- Promover y realizar investigaciones, estudios jurídicos y proyectos normativos relacionados al mejoramiento de la impartición de justicia;

VII.- Asesorar jurídicamente a los Plenos del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura y a la Presidencia del Tribunal;

VII bis.- Elaborar o revisar, en su caso, los proyectos de convenios de colaboración en los que figure como parte el Poder Judicial y dar seguimiento a su aprobación y firma;

VII ter.- Elaborar los modelos de contratos, así como revisar y validar, en su caso, los proyectos de los mismos, que deriven de los procedimientos de contrataciones públicas que realice el Poder Judicial del Estado;

VII quáter.- Llevar los libros de gobierno de los convenios y poderes que suscriba y otorgue, respectivamente, la persona titular de la Presidencia del Tribunal y del Consejo, que previamente hayan sido revisados por dicha Unidad;

VIII.- Elaborar el informe anual de actividades y entregarlo al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado para su análisis;

IX.- Formular el Manual de Operación de la Unidad y los demás que se requieran para su debido funcionamiento y someterlo a la consideración del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado;

X.- Realizar, en coordinación con la Unidad de Planeación, el estudio objetivo que en su caso motive y justifique las necesidades de incrementar o disminuir el número de personas magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de personas consejeras del Consejo de la Judicatura y personas magistradas del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, y

XI. Las demás que le confieran los Plenos del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura y otras disposiciones legales aplicables.

De todo lo anterior se evidencia la importancia que reviste el ente público denominado Tribunal Superior de Justicia del Estado como órgano que se encuentra a la cabeza del Poder Judicial del Estado de Yucatán, y de la función que desempeñan sus integrantes en asuntos de la competencia del pleno y para el debido ejercicio de sus atribuciones cuenta con funcionarios adscritos a diversas áreas jurisdiccionales y áreas administrativas, siendo una de ellas precisamente la Unidad de Administración y la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes, encargados de la administración de los recursos humanos, financieros y materiales del Tribunal, así como realizar los trabajos de análisis, proyectos, estudios e investigación jurídica en apoyo a la administración de justicia, respectivamente.

Tal como lo señaló el Coordinador jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la directora de la Unidad de Administración ambos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el oficio solicitado contiene un **análisis jurídico-administrativo** y propuesta realizada con fundamento en las fracciones I y XII del artículo 56, fracciones VI y VII del artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Yucatán; y en apego a lo dispuesto en el decimoquinto párrafo del artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán y la fracción I del artículo 6 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, respecto de la cual, el órgano encargado de deliberar sobre su implementación o ejecución, no ha tomado decisión alguna.

En ese sentido, este Comité advierte que, tal como lo señalaron las áreas signantes, la información solicitada respecto al contenido del oficio DUA-162/2024, debe reservarse, con fundamento en el artículo 113 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, que establece que podrá clasificarse como información reservada aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada.

Para este Comité se colman los requisitos previstos en los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas", así como la prueba de daño y de interés público que se refiere el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo siguiente:

En cuanto a los requisitos previstos en los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de La Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas", emitidos por Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, se acreditaron del siguiente modo:

- **La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio:**

En efecto, Tal como lo señaló el Coordinador jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la directora de la Unidad de Administración ambos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se advierte que dicho proceso deliberativo inició en la Décimo Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, celebrada el día 06 de junio de 2024, en la cual la Secretaria General de acuerdos, informó que durante el desarrollo de la Sesión, le fue presentado el oficio DUA-162/2024 de fecha 31 de mayo del año en curso, suscrito por el maestro en Derecho Carlos M. Cetina Patrón, coordinador jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la licenciada en administración María Cristina Sánchez Tello Zapata, directora de la Unidad de Administración, ambos de este Tribunal, y que transcurrido el tiempo para su análisis, por mayoría de votos, el Pleno aprobó el contenido del análisis jurídico-administrativo elaborado en conjunto por las áreas antes señaladas y, en consecuencia, ordenó comunicárselo a las mismas.

Con dichos actos se acredita que dio inicio un proceso deliberativo que aún se encuentra en curso, mismo que concluirá al momento en que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado emita una resolución final respecto a la implementación o ejecución de las propuestas contenidas en el oficio DUA-162/2024.

Los actos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en relación a la toma de conocimiento del oficio DUA-162/2024 coinciden con las características de un proceso

deliberativo ya que conforme al artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, previamente citado, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, tiene como atribución, entre otras, aprobar el anteproyecto anual de Presupuesto de Egresos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como ejercer el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, y resolver sobre transferencias de las partidas de dicho presupuesto

Toda vez que la propuesta, análisis, recomendación u opinión emitida en el del oficio DUA-162/2024 por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la Dirección de la Unidad de Administración, tiene una estrecha relación con aspectos de naturaleza presupuestal, debe entenderse que su análisis y en su caso implementación o ejecución, son actos que forman parte de un proceso deliberativo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, quien podrá o no tomar una decisión respecto a lo plasmado en dicho estudio, en ejercicio de sus atribuciones descritas en el artículo 30 referido previamente.

Además, el Coordinador jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la Directora de la Unidad de Administración ambos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, están en lo correcto al decir que el proceso deliberativo no se agota con la recepción del estudio jurídico-administrativo recibido por el Pleno, sino que éste órgano colegiado, en la toma de decisiones, está facultado para requerir información a otras áreas del Tribunal Superior de Justicia, a autoridades ajenas al Poder Judicial o agentes externos como universidades, colegios, entre otros, incluso, conforme a la fracción XXIII del artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia podrá acordar la contratación de servicios externos de asesoría, para el perfeccionamiento de la actividad jurisdiccional y de la que corresponde a las diferentes áreas del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Es decir, el Pleno, si bien tiene conocimiento de la opinión jurídico-administrativa emanada por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la Dirección de Administración del Tribunal Superior de Justicia sobre el tema al que hace referencia el oficio DUA-162/2024, podrá realizar diversos actos previa la toma de decisiones final que recaiga a las propuestas ahí planteadas.

- **Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que participan en el proceso deliberativo;** de la lectura del documento materia de reserva se advierte que la información contenida en el oficio DUA-162/2024 de fecha 31 de mayo del año en curso, se trata de una opinión, recomendación o punto de vista de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la Dirección de la Unidad de Administración.

Asimismo, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, las áreas firmantes del documento reservado dependen organizacionalmente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, ya que sus titulares son designados directamente por el Pleno del Tribunal conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, es decir, son unidades internas del Poder Judicial del Estado de Yucatán.

En tales condiciones, la información u opiniones que emanan de dichas áreas, y que dio inicio al proceso deliberativo de toma de decisiones por parte del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, forma parte del proceso deliberativo iniciado

tras la presentación del oficio al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán para su análisis, cumpliéndose así con este segundo requisito.

- **Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo:** Este requisito se cumple ya que justamente la información contenida en el oficio DUA-162/2024, materia de la reserva, es la que dio inicio a la discusión y deliberación de las acciones que en su caso se tomen para su implementación o ejecución, por lo que las decisiones finales que en su caso emita el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, tienen una estrecha relación con el estudio, análisis, punto de vista o recomendaciones planteadas en el mismo.
- **Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación.** En cuanto a este último requisito, se coincide con el Coordinador jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la directora de la Unidad de Administración ambos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cuanto a que de difundirse la información contenida en el oficio DUA-162/2024, se podría interrumpir, menoscabar o inhibir cualquier determinación que en su caso emita el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán para la implementación o ejecución de las propuestas expuestas en el estudio jurídico-administrativo de referencia.

Además, tal y como apuntan el Coordinador jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la directora de la Unidad de Administración ambos del Tribunal Superior de Justicia del Estado los magistrados y los jueces deberán emitir sus resoluciones, incluyendo las de naturaleza administrativa o presupuestal, al margen de presiones de los otros poderes, de las partes o grupos sociales, individuos o de los propios miembros del Poder Judicial.

El principio de independencia también conlleva que los órganos facultados para tomar decisiones en relación a la organización y funcionamiento del Poder Judicial del Estado puedan hacerlo libres de injerencias indebidas por parte de agentes externos. Ello no significa menoscabar el derecho de la sociedad de conocer la información, o una violación al principio de acceso a la información y transparencia, pues los solicitantes podrán tener conocimiento de la información solicitada una vez se haya tomado una decisión conclusiva, definitiva, sobre los temas plasmados en el oficio de referencia, y a la vez se garantiza el correcto desarrollo de las actividades deliberativas del máximo Tribunal del Estado.

Por tales motivos se concluye que dar a conocer información que pueda interrumpir, menoscabar o inhibir cualquier determinación que en su caso emita el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, debe entenderse que afecta o pone en riesgo la libre toma de decisiones de dicho ente colegiado.

Colmados los requisitos previstos en los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de La Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas", emitidos por Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es

necesario analizar si se encuentra debidamente fundada y motivado la determinación de reserva a través del test de prueba de daño.

Para ello hay que tomar en cuenta que la prueba de daño consiste en la argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados tendiente a acreditar que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla, es decir, se trata de un aspecto constreñido al ámbito argumentativo, la validez de la prueba de daño no depende de los medios de prueba que el sujeto obligado aporte, sino de la solidez del juicio de ponderación que se efectúe en los términos señalados.

Sirve de apoyo al respecto la siguiente tesis del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito:

Registro digital: 2018460

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Décima Época

Materias(s): Administrativa

Tesis: I.10o.A.79 A (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, página 2318

Tipo: Aislada

PRUEBA DE DAÑO EN LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SU VALIDEZ NO DEPENDE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE EL SUJETO OBLIGADO APORTE. De acuerdo con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los lineamientos segundo, fracción XIII y trigésimo tercero, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, aprobados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, la prueba de daño es la argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados para acreditar que la divulgación de la información lesiona un interés jurídicamente protegido y que el daño que puede producir es mayor que el interés de conocer ésta. Para tal efecto, disponen que en la clasificación de la información pública (como reservada o confidencial), debe justificarse que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; que ese riesgo supera el interés público general de que se difunda; y, que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Así, la prueba de daño establece líneas argumentativas mínimas que deben cursarse, a fin de constatar que la publicidad de la información solicitada no ocasionaría un daño a un interés jurídicamente protegido, ya sea de índole estatal o particular. Por tanto, al tratarse de un aspecto constreñido al ámbito argumentativo, la validez de la prueba de daño no depende de los medios de prueba que el sujeto obligado aporte, sino de la solidez del juicio de ponderación que se efectúe en los términos señalados.

La argumentación plasmada en el oficio del Coordinador jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la directora de la Unidad de Administración ambos del Tribunal Superior de Justicia del Estado mediante el cual se determinó reservar la información se encuentra debidamente fundada y motivada por los siguientes motivos:

i. **La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional**, ya que de conocerse información respecto al contenido del oficio DUA-162/2024, mismo documento que consiste en una opinión, recomendación o punto de vista emitido por unidades internas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, podría vulnerar el proceso deliberativo del Pleno que tuvo conocimiento del mismo y las resoluciones ejecutivas que en su caso emita.

En efecto, tal y como justificaron el Coordinador jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la directora de la Unidad de Administración ambos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dar a conocer las opiniones jurídico-administrativas contenidas en el oficio DUA-162/2024 a agentes externos al Poder Judicial del Estado, de manera previa a la toma de decisiones por quien legalmente tiene atribuciones para ejecutar su contenido, violaría el proceso deliberativo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, ya que factores externos podrían influir en la imparcialidad u objetividad de quienes forman parte de la toma de decisiones, afectándose la libertad decisoria de este ente colegiado.

Además, existe el riesgo de causar un daño al interés público de divulgarse la información contenida en el oficio DUA-162/2024, ya que conforme al artículo 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, las disposiciones contenidas en dicha Ley, incluyendo, las normas que facultan al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, para tomar decisiones relativas a su propio funcionamiento y organización, son normas de orden e interés público. En ese sentido, todo acto que impida, menoscabe, interrumpa o inhiba la toma de decisiones de dicho ente colegiado, como podría ser la divulgación a agentes externos de la información que aquí se pretende, debe considerarse perjudicial para el interés público, como así argumentaron el Coordinador jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la directora de la Unidad de Administración ambos del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

ii. Asimismo, se considera que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda la información, habida cuenta que si bien la sociedad pudiera tener cierto interés en conocer el contenido del oficio DUA-162/2024, la divulgación de aquellas opiniones, recomendaciones, puntos de vista, sobre temas que aún se encuentran en análisis y evaluación por parte del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, no aporta beneficio social alguno, y sí podría causar un daño precisamente al interés público que existe de salvaguardar y proteger el proceso deliberativo existente en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en particular, la toma de decisiones, libre y con independencia de todo lo referente a su organización interna y funcionamiento.

Considerar lo contrario significaría poner en riesgo la toma de decisiones libre e independiente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado respecto a aspectos íntimamente relacionados con su propia organización y funcionamiento, de tal modo que el riesgo de perjuicio es mayor al beneficio o interés que tendría el público general de que se difunda una información (estudio, opinión, propuesta) respecto de la cual no se ha tomado decisión alguna por el órgano colegiado con atribuciones para ello.

iii. Por último, se estima que la reserva de la información consistente en el contenido del oficio DUA-162/2024, se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, esto ya que la clasificación de la información solicitada como reservada cumple con el fin propuesto que es evitar el perjuicio que pudiese ocasionarse por dar a conocer a agentes externos las opiniones, recomendaciones o puntos de vista de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la Dirección de Administración del Tribunal Superior de Justicia previa a la toma de decisiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia en relación a las mismas.

Además el período de reserva surtirá efectos únicamente hasta en tanto el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán tome alguna decisión en relación a las propuestas planteadas en el estudio-jurídico administrativo que fue puesto a su conocimiento en la sesión del 6 de junio de 2024, y no es obstáculo para conocer el contenido de la citada acta disponible para su consulta de manera gratuita en la dirección electrónica: <https://www.tsjyuc.gob.mx/tsj/actasPleno/OR11-240606.pdf>, así como las subsecuentes sesiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia en las que se tomarán, en su caso, decisiones relacionadas con el estudio que aquí se solicita.

Tal y como justificaron el Coordinador jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la directora de la Unidad de Administración ambos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de este modo se garantiza el derecho del solicitante de conocer la información que ha sido requerida, toda vez que la misma será entregada una vez el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán tome alguna decisión relacionada con el contenido del estudio referido, y a la vez, se salvaguarda la facultad del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de tomar las decisiones relativas a su propia organización y funcionamiento de forma libre e independiente de cualquier injerencia externa.

En cuanto al plazo de reserva. Las áreas mencionadas en el cuerpo de esta resolución clasificaron la información como reservada por un período de seis meses, plazo que este Comité considera justificado ya que resulta suficiente para que en dicho plazo el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán emita una decisión definitiva en relación al contenido del oficio DUA-162/2024 y las propuestas, opiniones o recomendaciones plasmadas en el mismo, por lo que de conformidad con la norma se confirma el plazo de reserva de seis meses establecido por el área requerida en términos de lo señalado en el artículo 101⁵ segundo párrafo de la referida ley general, en la inteligencia que una vez transcurrido el mismo será necesario volver a analizar si subsisten las causas que dieron origen a su clasificación.

Por lo anterior, este Comité de Transparencia, con fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, CONFIRMA la clasificación de información reservada, determinada por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la directora de la Unidad de Administración ambos del Tribunal Superior de Justicia del Estado en la parte conducente de la solicitud de acceso a la información con número de folio **310573824000152**, relativa al contenido del oficio número **DUA-162/2024**.

En atención a lo anteriormente expuesto y fundado, el Comité de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán:

RESUELVE

PRIMERO. - Se confirma la clasificación de información de carácter reservada determinada por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la directora de la Unidad de Administración ambos del Tribunal Superior de Justicia del Estado en la parte conducente de la solicitud de acceso a la información con número de folio **310573824000152**, relativa al contenido del oficio número **DUA-162/2024**.

⁵ Artículo 101. ...




...
La información clasificada como reservada, según el artículo 113 de esta Ley, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el documento."

SEGUNDO. - Infórmese a la interesada que la presente resolución puede ser impugnada a través del Recurso de Revisión, dentro de los 15 días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.

TERCERO. - Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Tribunal Superior de Justicia del Estado para realizar la notificación de esta resolución, bajo la modalidad señalada en la solicitud.

CUARTO. - Cúmplase.

Así lo resolvieron y firman, los integrantes de este comité que participaron en esta sesión, tomando en consideración que se cuenta con la concurrencia requerida para sesionar, se determina que existe quórum legal para llevar a cabo la sesión convocada de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo General OR14-160804-23 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán por el que se regula al Comité de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia, Licenciada en Derecho Mersy Jaquelin Arjona Díaz, Secretaria General de Acuerdos, Licenciada en Administración María Cristina Sánchez Tello, titular de la Unidad de Administración, Abogada Karen Alejandra Alonzo González, Jefa del Departamento de Contraloría Interna y Licenciada en Derecho Gina González Dogre, Coordinadora Jurídica de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes, presidenta y vocales, respectivamente, del Comité de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en sesión de fecha treinta de agosto de dos mil veinticuatro.

NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTA LICENCIADA EN DERECHO MERSY JAQUELÍN ARJONA DÍAZ	
VOCAL LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN MARÍA CRISTINA SÁNCHEZ TELLO ZAPATA.	
VOCAL ABOGADA KAREN ALEJANDRA ALONZO GONZÁLEZ	
VOCAL LICENCIADA EN DERECHO GINA GONZÁLEZ DOGRE	

Esta foja pertenece a la Resolución emitida por el Comité de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia en la solicitud de acceso a la información con número de folio **310573824000152**, el treinta de agosto de dos mil veinticuatro.